

Elecciones en Bolivia y vientos de cambio hacia la derecha

Reporte No. 149
Comité PPD e Independientes
Agosto 2025

La primera vuelta de las próximas elecciones presidenciales, que se celebrarán este domingo 17 de agosto de 2025 —mientras que la segunda vuelta está prevista para el próximo 19 de octubre—, están inscritas en el contexto de las celebraciones del bicentenario de la independencia del país, obtenida en 1825. Sin embargo, el país no está para festejos y atraviesa una grave crisis energética y económica, marcada por la escasez de combustible y un déficit comercial en aumento. La dependencia de las importaciones, en particular de combustibles, debilita la estabilidad monetaria, mientras que los intentos de reactivación industrial o diversificación económica tienen dificultades para concretarse.

Debilitado por el contexto económico y minado por divisiones internas, el Gobierno no ha logrado imponer un discurso unificador en torno al bicentenario de esta nación multiétnica, dejando paso a divisiones sociales, regionales, étnicas y generacionales.

El fin de un modelo

La matriz de crecimiento impulsado por las exportaciones de gas natural, que había permitido aplicar medidas reales de redistribución social durante los catorce años del «proceso de cambio» liderado por el dúo Morales-García Linera, ya no es sostenible. La reciente escasez de gasolina y diésel ha puesto de manifiesto una mayor dependencia de las importaciones de combustible, así como un debilitamiento de la capacidad de refinación del país. La falta de divisas extranjeras dificulta el pago de las importaciones esenciales, lo que socava la estabilidad económica y monetaria del país.

Las reservas internacionales, antes sólidas, parecen haberse agotado, y el banco central funciona bajo presión. El déficit comercial se agrava, mientras que los proyectos de desarrollo del litio —que se suponía iban a reactivar la economía— no han pasado de la fase de anuncios, desde que en 2021 se optó por la extracción directa.

La economía informal, ya dominante, se ha extendido aún más en un contexto de inflación muy elevada. Sobre el terreno, en los mercados o cerca de las gasolineras, las colas son testimonio de las frustraciones cotidianas que erosionan el vínculo entre el Estado, los ciudadanos y las organizaciones sociales.

El MAS y su autodestrucción

Si bien el Movimiento al Socialismo (MAS), fundado por Evo Morales en 1997, pudo contar durante mucho tiempo con un voto firme y leal, la escena política boliviana se caracteriza hoy en día por una profunda fragmentación del partido, hasta el punto de que algunos analistas han hablado de un «suicidio político» o de «autodestrucción».

Cuando Evo Morales apoyó la candidatura de Luis Arce a la presidencia en 2020, la elección parecía estratégica: Arce estaba asociado al éxito económico de los años de Morales y parecía ser un tecnócrata leal. Sin embargo, una vez Arce en el poder, surgieron divergencias, especialmente en lo que respecta a las decisiones económicas y los nombramientos. De esta

forma desde 2023 la ruptura es definitiva y Morales declara su intención de presentarse como candidato en 2025, mientras que Arce da a entender que podría volver a presentarse.

En 2024, el partido se divide en dos bandos irreconciliables: por un lado, el expresidente Evo Morales, finalmente excluido de la carrera electoral por el Tribunal Constitucional, pero que sigue siendo influyente y al frente de un aparato partidista paralelo. Hoy ni Evo ni Arce serán candidatos, pero su oposición ha dado lugar a dos candidatos que pretenden encarnar a la izquierda popular y que reivindican cada uno el legado del proceso de cambio.

Esta escisión ha sacado al MAS de su posición central, abriendo así el camino a una posible victoria de candidaturas centristas o conservadoras, lo que no habría sido posible en otros tiempos.

El otrora poderoso MAS marcó un punto de inflexión en la historia política boliviana, impulsado por un ciclo de reivindicaciones sociales que agitaba el país desde finales de la década de 1990, y reivindicando otra concepción de la nación: ya no mestiza y republicana, como quería el discurso «integracionista» del MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario) y de la Revolución Nacional (1952-1964), sino indígena y plurinacional. La Constitución de 2009, que rebautiza al país como Estado Plurinacional de Bolivia, consagra esta nueva orientación.

Una nueva narrativa

El MAS construyó un nuevo imaginario y produjo una nueva memoria nacional. El 2 de agosto, antiguo «Día del Indio» instaurado por el MNR, se ha convertido en el «Día de la Revolución Agraria, Comunitaria y Productiva». El indígena deja así de aparecer como un sujeto problemático que hay que integrar para ser definido como un actor histórico de pleno derecho. La pertenencia étnica y la reivindicación lingüística, durante mucho tiempo sinónimos de discriminación, pueden ahora considerarse símbolos de movilización y reconocimiento.

Sin embargo, esta retórica de la descolonización parece haber perdido su poder movilizador, y las generaciones jóvenes reclaman derechos, servicios, trabajo y una ecología realista, más allá de los símbolos.

Sin embargo, a pesar de la crisis actual del MAS, el proceso de cambio ha transformado profundamente el país, abriendo un campo de posibilidades simbólicas y políticas que sin duda no podrá cerrarse por completo. La idea misma de un Estado plurinacional, el reconocimiento constitucional de las naciones y pueblos indígenas, la generalización de ciertas prácticas comunitarias en la gestión pública o la legitimación de formas de soberanía popular han redefinido los contornos de la ciudadanía y el poder. Desplazar el centro de gravedad de la política desde las élites urbanas hacia los mundos indígenas, sindicales y populares ha modificado de forma duradera el imaginario colectivo. Hoy se ha institucionalizado una cierta gramática de la descolonización, y ningún candidato serio puede concebir un proyecto nacional sin tenerla en cuenta.

Oposición y ascenso de la derecha

Por primera vez en dos décadas, la derecha y el centro aparecen como favoritos en las encuestas y en los resultados preliminares. Los candidatos Rodrigo Paz Pereira (Partido Demócrata Cristiano) y Jorge "Tuto" Quiroga (Alianza Libre) obtuvieron los mejores resultados en la primera vuelta realizada el 17 de agosto, y se enfrentarán en un balotaje histórico el 19 de octubre. Esto señala el fin del ciclo político dominado por el MAS y la izquierda boliviana, y abre

la puerta para un nuevo periodo encabezado por candidatos de derecha, lo que implica un viraje importante en la orientación política y económica del país.

Otros candidatos, como el empresario Samuel Doria Medina y representantes de la izquierda como Andrónico Rodríguez, quedaron muy por detrás en los conteos, reflejando el bajo peso actual de las fuerzas progresistas y la fragmentación interna de sus movimientos.

El voto nulo alcanzó una cifra histórica en torno al 19% y es la primera vez en dos décadas que la izquierda boliviana y el MAS quedan fuera de la disputa principal por la presidencia, reflejando su crisis interna y el hartazgo social hacia el oficialismo. El giro hacia la derecha es inevitable.

Link sugerido

<https://www.pagina12.com.ar/850259-elecciones-en-bolivia-hay-expectativas-por-el-posible-cambio>

Perú 2026, incertidumbre y degradación del sistema

Reporte No. 150
Comité PPD e Independientes
Agosto 2025

Las elecciones en Perú se preparan para ser las más complejas de la historia del país, con una gran cantidad de partidos políticos y candidatos. La fecha de la elección está fijada para el 12 de abril de 2026 y en ella se elegirá presidente, vicepresidentes, y representantes al Congreso y Parlamento Andino para el periodo 2026-2031. Se prevé que participen más de 40 partidos políticos, lo que complejiza la contienda electoral y fragmenta aun mas la realidad política. Para el Congreso se elegirán 190 congresistas distribuidos en 27 distritos electorales, con un sistema de cifra repartidora y doble voto preferencial opcional. Los partidos deben superar un umbral electoral del 5% o ganar al menos siete escaños en una circunscripción para obtener representación en el Congreso.

Candidatos principales y contexto

Keiko Fujimori (Fuerza Popular): líder del partido de derecha, hija del expresidente Alberto Fujimori, ha sido candidata en elecciones anteriores y tiene una base electoral consolidada especialmente en sectores conservadores y de clase media. Aunque su intención de voto ha bajado ligeramente, sigue siendo una de las principales favoritas.

Rafael López Aliaga (Renovación Popular): Empresario y político de derecha, alcalde de Lima. Ha ganado popularidad en sectores conservadores y religiosos, posicionándose como un candidato duro con propuestas económicas liberales.

Carlos Álvarez (País para Todos): Empresario y político con menor apoyo popular comparado con los anteriores, pero figura en las encuestas dentro de los primeros puestos.

La situación política está marcada por preocupación ciudadana sobre la inseguridad y corrupción, lo que incrementa el respaldo a líderes que ofrecen y prometen mano dura para combatir la violencia, sin embargo, ningún candidato supera el 10% de intención de voto, lo que refleja un electorado disperso y desconfiado.

Más del 98% de los peruanos considera que la presidenta Dina Boluarte no es capaz de gobernar efectivamente, y la desafección política afecta tanto a los partidos tradicionales como a nuevos actores. Predomina un electorado escéptico y fragmentado, que, sin embargo, demanda coherencia, preparación y resultados más que discursos populistas o salvadores. La campaña será influenciada fuertemente por redes sociales y medios digitales, con electores jóvenes y conectados.

Situación de la economía

Se proyecta un crecimiento de alrededor del 3.1% para 2025, apoyado principalmente por precios altos en los metales (cobre y oro), un mejor desempeño de la demanda interna, y el inicio de la construcción de nuevas minas. El crecimiento para 2026 se espera algo menor, en torno al 2.7% debido a la propia incertidumbre electoral y un entorno global más complejo. Actualmente la inflación se mantiene controlada y dentro del rango meta establecido por el

Banco Central, proyectándose cerca del 2.5% para 2025, con expectativas inflacionarias ancladas.

Es esperable que el déficit fiscal baje a 2.4% del PIB en 2025, con una deuda pública bruta que aún se mantiene baja pero podría empezar a incrementarse debido a nuevas medidas fiscales de mayor gasto o reducción de ingresos.

En un contexto en el que la economía global enfrenta proteccionismo y tensiones comerciales, especialmente entre EE. UU. y sus socios, las exportaciones peruanas también se han visto afectadas, encareciéndolas, reduciendo la competitividad y potencialmente disminuyendo el volumen exportado. Productos agrícolas peruanos como espárragos, arándanos y uvas, que tienen un gran mercado en EE.UU., son los más impactados por estos aranceles, afectando a un sector relevante en empleo y exportaciones.

En el caso de sectores clave como la minería (especialmente el cobre) el país enfrenta una situación mixta. En agosto de 2025 se aplicó un arancel del 50% a productos semiterminados de cobre importados por EE.UU., pero los insumos básicos y concentrados de cobre peruanos quedaron exentos, limitando el impacto negativo directo en la minería peruana que exporta mayormente a China. Dado que la dependencia de Perú del mercado estadounidense es menor comparado con otros países de la región; aproximadamente el 13% de sus exportaciones, el impacto total se considera moderado.

Cronología de la degradación política

Perú ha tenido seis presidentes en ocho años, lo que refleja una profunda crisis institucional y falta de gobernabilidad. La gestión actual de la presidenta Dina Boluarte enfrenta una baja popularidad y tensiones constantes con el Congreso. Duarte, quien ha cambiado ministros varias veces (4 primeros ministros en 2.5 años), no ha logrado mostrar avances significativos contra la inseguridad o corrupción.

Un dato interesante que grafica el quiebre y desgaste institucional del país es el hecho de que todos los expresidentes vivos están investigados o presos por corrupción, escenarios que deslegitiman profundamente la política nacional.

La situación de degradación política en Perú puede analizarse entonces a partir de las sucesivas crisis presidenciales que han marcado este deterioro sistemático de la gobernabilidad, de la estabilidad institucional y la confianza ciudadana en el sistema político. Este proceso comenzó a evidenciarse de forma aguda desde 2016 y ha tenido varias etapas y manifestaciones clave:

Crisis de 2016-2020: El conflicto persistente entre el Poder Ejecutivo y un Congreso dominado por el fujimorismo (partido de oposición) generó un clima de confrontación política extremo. El presidente Pedro Pablo Kuczynski enfrentó varios intentos de vacancia y finalmente renunció en 2018 por escándalos de corrupción ligados al caso Odebrecht. Su sucesor, Martín Vizcarra, intentó reformas contra la corrupción, pero fue destituido por el Congreso en 2020, cuando hubo incluso un breve gobierno de transición con Manuel Merino que provocó protestas masivas y violencia. La degradación institucional se reflejó en acusaciones de corrupción, falta de mayoría parlamentaria, crisis ministeriales y constantes enfrentamientos entre poderes del Estado.

Crisis política 2021-presente: La elección de Pedro Castillo en 2021, un candidato surgido de sectores rurales y populares, encendió esperanzas de cambio, pero también

profundizó polarización y confrontación con el Congreso multipartidario. Castillo enfrentó a un parlamento adverso que promovió varios intentos de vacancia presidencial. Su gobierno estuvo marcado por crisis ministeriales, denuncias de corrupción y poca gobernabilidad. El punto crítico fue su intento fallido de disolver el Congreso y dar un autogolpe en diciembre de 2022, lo que resultó en su destitución y arresto.

Gobierno de Dina Boluarte: Asumiendo tras la destitución de Castillo, Boluarte enfrenta protestas masivas y llamada a elecciones anticipadas, al tiempo que la concentración de poder en el Congreso fujimorista y su control sobre instituciones claves ha generado cuestionamientos sobre la calidad democrática y la representatividad del sistema político.

Link sugerido

<https://grupogoberna.com/elecciones-peru-2026-fragmentacion-politica/>

Fake News, más que amenazas.

Reporte No. 151
Comité PPD e Independientes
Agosto 2025

Las fake news representan una de las amenazas globales más inquietantes de la era digital, con impactos comprobados en la democracia, la salud pública, la cohesión social, la vida civil, la seguridad nacional y los procesos electorales. Las encuestas recientes a nivel mundial señalan que la desinformación en internet se percibe como la mayor amenaza nacional en países europeos como Alemania y Polonia, donde más del 80% de los ciudadanos así lo considera. Esta percepción se agrava en contextos electorales, donde campañas coordinadas, muchas veces desde otros países, buscan manipular la opinión pública y socavar la estabilidad de los estados democráticos.

Las consecuencias de las fake news son múltiples ya que distorsionan la percepción de la realidad, dificultan la toma de decisiones informadas y propagan discursos de odio. Sus alcances durante la pandemia de COVID-19, con la difusión de noticias falsas sobre vacunas y tratamientos puso en riesgo la vida de millones e influyó negativamente en el manejo sanitario global.

Evidencia científica y estudios relevantes

Las fake news tienden a difundirse mucho más rápido y en mayor volumen que la información verdadera, debido a contenidos que apelan a las emociones y narrativas simplistas. Según una investigación del MIT (Vosoughi et al., 2018), las fake news son un 70% más propensas a volverse virales que la información verídica, especialmente en temas políticos.

Adicionalmente, diversos informes de organizaciones han documentado que en varios países europeos, la desinformación es vista hoy como una de las principales amenazas nacionales, incluso por encima del terrorismo o el cambio climático.

La última encuesta de Pew Research Center sobre las fake news, publicada en 2025, revela que la mayoría de los adultos en 25 países consideran que la difusión de información falsa en línea es una amenaza importante para sus países. Un promedio del 72% de los adultos encuestados manifiesta que las fake news son una amenaza grave, con un 21% que las considera una amenaza menor y sólo el 5% que piensa que no representan amenaza alguna. En países como Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Corea del Sur y otros, la preocupación por la información falsa supera a la de otros problemas importantes.

Además, la encuesta muestra que la preocupación por las fake news es alta en regiones como África Subsahariana y América Latina, y también se relaciona con niveles de satisfacción con la democracia: quienes ven la difusión de noticias falsas como un problema muy serio suelen estar menos satisfechos con la democracia en sus países. El estudio también enfatiza la conexión entre la preocupación por estas noticias falsas y la importancia que las personas otorgan a la libertad de prensa y expresión. En general, las fake news son vistas como una amenaza global significativa y creciente en el contexto actual.

Este mismo centro de investigación realizó un estudio presentado en 2023 que reveló detalles importantes sobre el consumo y la difusión de noticias falsas en redes sociales en Estados Unidos. Del análisis se desprende que Facebook es la red social más utilizada para informarse, con un 67% de usuarios que la emplean como fuente principal de noticias, siendo los formatos más comunes para compartir noticias falsas aquellos visuales y audiovisuales (videos, imágenes), pues tienden a ser menos cuestionados y fácilmente virales, dado que la mayoría de usuarios no verifica la veracidad del contenido completo y solo lee o comenta los titulares impulsivamente.

Al mismo tiempo, un porcentaje significativo de adultos en EEUU ha compartido noticias que luego descubrió como falsas o incluso sabiendo que eran falsas, lo que refleja una problemática no solo de exposición sino también de comportamiento y responsabilidad activa en la difusión de desinformación.

Un estudio de la Universidad de Santiago de Compostela usando datos del Eurobarómetro demostró que tanto las fake news como la falta de libertad de prensa erosionan la satisfacción ciudadana con la democracia y contribuyen directamente al descontento con el sistema democrático.

Otra de las investigaciones de Pew Research Center abordó igualmente la desinformación en Latinoamérica utilizando el cuestionario del Latinobarómetro 2023, enfocándose en 6 países de la región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, donde mostró que la percepción de la presencia de fake news en medios como redes sociales y televisión es alta, y que existe una relación importante entre esta percepción y la demanda de regulación de las noticias falsas. Los países analizados presentan patrones similares en cuanto a factores que motivan el apoyo al control de la desinformación, con diferencias basadas en variables políticas y culturales.

Organismos como la OCDE y la OEA advierten que la desinformación limita el acceso a información confiable y restringe el ejercicio de una ciudadanía informada, aumentando el clima de desconfianza generalizada hacia los pilares democráticos, lo que genera un riesgo estructural para la legitimidad y estabilidad de los sistemas democráticos modernos.

Líderes populistas

Estudios sobre líderes populistas latinoamericanos muestran que más del 50% del contenido difundido en sus redes sociales contiene desinformación, la cual está orientada a crear una narrativa de “pueblo versus élite” y a reforzar el mensaje populista mediante la creación de enemigos externos e internos. Esta estrategia se apoya en el uso reiterado de dicotomías y discursos emocionales como la ira o el miedo, consolidando una comunicación centrada en “nosotros” vs “ellos”, utilizando noticias falsas para alimentar la hostilidad hacia los adversarios políticos y movilizar emocionalmente a la base electoral.

En Europa, la viralización de fake news a través de redes sociales ha contribuido al posicionamiento político extremo y a la legitimación de discursos populistas, especialmente entre los jóvenes y quienes se informan prioritariamente por medios digitales. Diversas investigaciones asocian el auge del populismo con el uso estratégico de desinformación por partidos y líderes de corte radical.

La experiencia sudamericana muestra que la propagación sistemática de fake news ha logrado cambiar percepciones y hasta resultados electorales. Algunos ejemplos destacados incluyen:

- **México (2018):** Las campañas presidenciales estuvieron marcadas por noticias falsas contra candidatos principales como Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya y José Antonio Meade. Se difundieron encuestas manipuladas, videos y declaraciones sacadas de contexto para atacar a los contendientes, y campañas coordinadas de desinformación que aprovecharon la polarización política.
- **Chile (Plebiscito constitucional 2022):** Se detectó una intensa actividad de fake news relacionada con el proceso constituyente, con mensajes falsos sobre el derecho al voto de migrantes y supuestas exenciones de multas para ciertos grupos de votantes, que buscaban desinformar y desincentivar la participación electoral.
- **Guatemala (2023):** Se viralizó una imagen manipulada con inteligencia artificial usada para atacar a una candidata, generando desinformación en plena campaña hacia la segunda vuelta presidencial.
- **Ecuador (2023):** Videos sacados de contexto se usaron para desacreditar al entonces candidato presidencial Daniel Noboa, acusándolo falsamente de proponer trabajo infantil, lo que afectó su imagen electoral.
- **Brasil (elecciones recientes):** La desinformación en redes sociales contribuyó a la polarización y a la crisis de confianza en el sistema electoral tras la reelección de Lula da Silva; se usaron fake news para difundir acusaciones infundadas de fraude electoral.

Viralidad

Un estudio de Meta/Science liderado por la investigadora Sandra González-Bailón, analizó la actividad de 208 millones de usuarios estadounidenses en Facebook durante el periodo de las elecciones de 2020, y encontró diferencias significativas entre usuarios de derecha y de izquierda en cuanto al consumo de fake news.

Los usuarios con inclinación política hacia la derecha consumen la gran mayoría de las noticias etiquetadas como falsas por fact-checkers de Meta: el 97% de estas noticias falsas circulan dentro del grupo conservador. En contraste, la audiencia de izquierda tiene una menor exposición y consumo de estas fake news. Facebook mostró ser una red informativa más dominada por audiencias conservadoras en temas políticos, generándose un ecosistema donde los usuarios de derecha forman un circuito en el que circulan masivamente las noticias falsas.

Respecto al algoritmo, el estudio señala que la segregación en el consumo informativo tiene tanto un componente social (preferencias y comportamientos previos de los usuarios) como algorítmico, ya que los algoritmos de Facebook e Instagram aprenden de estos comportamientos y refuerzan las dietas informativas ideológicamente sesgadas.

Experimentos dentro del estudio mostraron que reemplazar el algoritmo por un orden cronológico en el feed apenas cambia las tendencias de polarización o conocimiento político, lo que indica que la polarización no depende exclusivamente del algoritmo sino también de factores sociales subyacentes, como la predisposición y afiliación política de los usuarios. Se advierte que, aunque las intervenciones algorítmicas tienen impacto en el tiempo que los usuarios pasan en la plataforma y en la variedad del contenido, la polarización y consumo de fake news están muy ligados a las comunidades y comportamientos sociales previos de los usuarios.

Chile

El fenómeno de la desinformación en Chile se intensificó con la pandemia de COVID-19, propagándose principalmente por plataformas sociales como Facebook, Instagram, TikTok y

sistemas de mensajería, en un contexto de alto consumo digital y decreciente consumo de medios tradicionales.

Un estudio de Activa Research sobre fake news presentado el 2023 y realizado en conjunto con la Worldwide Independent Network of Market Research (WIN), contó con 6.049 entrevistas en ocho países latinoamericanos, entre ellos Chile, por lo que ofrece la oportunidad de una mirada amplia y regional sobre la percepción ciudadana respecto a la desinformación y sus impactos en la democracia, la polarización política y el proceso electoral.

- El 52% de los chilenos afirma recibir “todos o casi todos los días” información falsa o tergiversada, mientras que un 29% asegura que esto le ocurre al menos una vez por semana.
- En Latinoamérica, un 49% de la población reporta encontrarse con noticias falsas diariamente, y el 73% considera que la desinformación en las noticias es un problema importante para sus países.
- El 71% de los chilenos cree que la desinformación es una amenaza para la democracia; un 68% piensa que debilita el proceso electoral; y un 65% considera que aumenta la polarización política.
- Un 42% de los chilenos se siente “algo confiado” para reconocer información falsa, y un 32% “muy confiado”, aunque solo un 19% de los latinoamericanos visita otras fuentes para verificar la veracidad de las noticias que recibe.
- En Chile, las principales fuentes de información donde se detecta más desinformación son TV (35%), noticias online (14%) y Facebook (12%).
- Los actores menos confiables para la difusión de información en Chile y Latinoamérica son: políticos, famosos, gobierno y activistas; mientras que la familia, amigos, internet y colegios son los más confiables.
- Se destaca que la desinformación circula rápida y masivamente, beneficiada por las redes sociales y la tecnología, afectando la salud de los sistemas democráticos y la percepción de la ciudadanía.

Plebiscito de 2022, un ejemplo de la máquina de fake news

La desinformación fue un factor presente y relevante durante la campaña electoral, con gran circulación de noticias falsas vinculadas a la propuesta constitucional y sus implicancias. Estas fake news promovían desconfianza y temor atribuyendo a la nueva Constitución amenazas a la seguridad nacional, influencia extranjera o cambios radicales inexistentes en el texto. El Servicio Electoral (Servel) advirtió sobre la desinformación y creó un repositorio con mensajes falsos y sus desmentidos para contrarrestarla, aunque no contaba con atribuciones legales para sancionar las fake news difundidas en la campaña.

Estudios indican que en el subconsciente de muchos votantes se crearon “irrealidades” a partir de la información falsa, que impactaron la comprensión del texto constitucional y motivaron votos basados en percepciones erróneas. La circulación de noticias sobre temas sensibles como herencias, aborto, educación, y seguridad, se convirtieron en fantasmas presentes pero que no tenían sustento en el contenido real. También hay investigaciones que sugieren que la influencia de estas fake news puede haberse traducido en un impacto notable en el resultado del plebiscito, moldeando la opinión pública y la decisión del voto en un contexto muy polarizado.

Link sugeridos

https://minciencia.gob.cl/uploads/filer_public/26/cb/26cb92cb-5614-4e7c-a46e-f001a2b838b1/informe_i_-_el_fenomeno_de_la_desinformacion_global_y_en_chile_1.pdf

<https://uchile.cl/noticias/188632/fake-news-el-peligro-de-la-desinformacion-y-su-impacto>

<https://chile.activasite.com/estudios/estudio-global-fake-news/>

<https://www.uandes.cl/noticias/plebiscito-del-4-de-septiembre-influyo-la-circulacion-de-noticias-falsas-en-el-resultado-electoral/>

Elecciones en Chile, voto obligatorio

Reporte No. 152
Comité PPD e Independientes
Agosto 2025

Las próximas elecciones en Chile se celebrarán el 16 de noviembre de 2025 en un contexto cargado de expectativas y frustraciones: llevamos auestas el impacto del estallido social de 2019, la pandemia y sus particularidades, el aumento de la población migrante y el fracaso de dos procesos constituyentes que generaron grandes expectativas de cambio social pero también desilusión y desconfianza en las instituciones tradicionales.

Los temas de seguridad (con énfasis en el aumento de la delincuencia y la presencia de organizaciones criminales) y de migración han pasado a monopolizar la agenda política acicateados por los medios de comunicación y la viralización de ciertas convenientes narrativas en redes sociales. Los asuntos que preocupan a los chilenos y a los votantes del mundo parecen tener hoy, más que nunca, un hilo conductor.

Participación

En las elecciones presidenciales de 2021, la participación fue del 47,34% en primera vuelta, evidenciando una histórica abstención del electorado, aunque la reintroducción del voto obligatorio en los recientes comicios locales elevó la participación y es probable que ocurra lo mismo en las elecciones de 2025. Además, en la segunda vuelta de 2021, Gabriel Boric se convirtió en el presidente electo más joven del país, con el mayor número de votos recibidos en la historia de Chile (55,8% de los sufragios). La tendencia a la abstención ha sido un desafío recurrente, sobre todo en comunas urbanas vulnerables y entre jóvenes, aunque el voto obligatorio pareciera estar revirtiendo este fenómeno.

En el campo político, la coalición de izquierda liderada por Gabriel Boric enfrenta la presión del ascenso de la extrema derecha y la evidente desazón ciudadana ante las respuestas institucionales a problemáticas clave como la seguridad y la previsión social. El contexto político está tensionado por una ciudadanía que exige seguridad y estabilidad, frente a décadas de desconfianza hacia las élites políticas, sumándose una crisis de representatividad acelerada tras los procesos constituyentes trancos. Aun cuando el acuerdo político de enero de 2025 en torno a la reforma del sistema de pensiones marca una señal de posibles consensos entre sectores políticos antagonistas, sigue presente la polarización y el descrédito de la democracia propiciado por la desinformación y las fake news como marco de fondo.

Voto obligatorio

El retorno del voto obligatorio en Chile impactará notablemente tanto en la participación ciudadana como en los resultados electorales, incrementando la afluencia a las urnas y diversificando el perfil de electores, lo que puede modificar el mapa político tradicional. Recordemos que con la reinstauración del voto obligatorio en el plebiscito constitucional de salida de 2022, la participación alcanzó un 86%, sumando más de 3 millones de nuevos votantes respecto a elecciones anteriores con voto voluntario.

El segmento joven, históricamente más abstencionista, mostró una sorprendente participación de cerca del 90% en ciertos grupos etarios, desafiando la idea de apatía política en la juventud y contrastando con la baja asistencia (menos del 50%) observada durante el periodo de voto voluntario entre 2012 y 2022, donde sectores vulnerables y jóvenes participaban mucho menos.

Hoy se suman al padrón electoral votantes sin identificación política clara, personas que no suelen votar bajo el esquema voluntario y cuyas prioridades pueden diferir de aquellas de los votantes tradicionales. Para las elecciones 2025, el padrón definitivo tiene aproximadamente 15.450.377 electores habilitados, incluyendo unos 786.470 extranjeros inscritos,

Si bien el voto obligatorio fuerza una mayor integración social, representa mejor al país real y desafía a los partidos a abordar demandas amplias y concretas; también es cierto que puede acentuar la desafección política si la obligación no va acompañada de una mayor educación cívica e inclusión deliberada de las inquietudes de los nuevos votantes.

Según datos del SERVEL, el voto obligatorio en el plebiscito de 2022 sumó más de 3 millones de nuevos votantes, predominando hombres jóvenes entre 18 y 34 años y habitantes de la Región Metropolitana, con un promedio de edad de los nuevos votantes de 43,5 años frente a los 48,5 años de quienes votaban habitualmente.

Al mismo tiempo se incrementó la presencia de personas de sectores socioeconómicos medios-bajos y bajos, antes subrepresentados. Así, el nuevo electorado tiende a tener menor nivel educacional y mostrar posturas más moderadas o conservadoras en temas sociales, comparado con quienes siempre han tenido un hábito de voto. Ello se traduce en una disminución de los “votantes duros” (personas que siempre votaban voluntariamente) en el peso relativo del padrón, equilibrando la representatividad entre diferentes grupos sociales y territoriales.

El principal desafío en este escenario es cómo incluir a este nuevo electorado en el debate público y engancharlos con políticas concretas, dada su baja identificación política y desconfianza con la institucionalidad. Por ello sería sensato pensar en fortalecer la formación cívica para convertir el voto motivado por la obligación en un voto nacido de la participación consciente y sostenida.

Otros países de LATAM

En América Latina el voto obligatorio está vigente en varios países, pero su implementación y las sanciones ante la abstención varían bastante, lo que impacta directamente en la participación electoral.

El voto es obligatorio en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Haití y República Dominicana. En Brasil el voto es obligatorio para ciudadanos entre 18 y 70 años, con sanciones leves (multa y restricciones administrativas) para quienes no votan. En Uruguay, Argentina, Perú y Ecuador, en tanto, la sanción puede ser monetaria o la imposibilidad de trámites administrativos para quienes no cumplen; aunque en Argentina, Brasil y Ecuador existen algunas excepciones etareas, con voto optativo para jóvenes de 16 y 17 años y adultos mayores.

La situación del voto obligatorio en la región muestra que su aplicación y las sanciones condicionan el nivel de participación y el perfil de los electores que concurren, generando mayor inclusión social cuando se aplican medidas efectivas para el cumplimiento de la norma. En países

donde el voto es obligatorio y hay sanción, la participación promedio supera el 80%, como ocurre en Brasil, Perú, Argentina y ahora Chile. En tanto, en aquellos países con voto obligatorio pero sin sanciones, la participación es ligeramente superior respecto a aquellos con voto voluntario (65% frente a 55% en promedio).

Cuando hay sanciones efectivas, el salto en participación puede ser de hasta 30-35 puntos porcentuales, como se evidenció en Chile luego del retorno del voto obligatorio y las sanciones económicas establecidas para el plebiscito de 2022.

Links sugeridos

<https://panelciudadano.cl/chile-sumergido-2/>

<https://www.celag.org/voto-obligatorio-y-participacion-electoral-en-america-latina/>